

Una Herida Demasiado Profunda



**La Retirada de la Ayuda Exterior de EE. UU. y
el Colapso de los Servicios de Protección para
Mujeres y Niñas en Honduras**



La Women's Refugee Commission (WRC) contribuye a mejorar las condiciones de vida y a promover la protección de los derechos de mujeres, así como de niñez y juventud desplazada por conflictos y crisis. Identifica las necesidades expresadas por estas poblaciones, construye soluciones en conjunto con actores locales y aboga por programas y políticas que fortalezcan su resiliencia y generen cambios en la práctica humanitaria. Desde su fundación en 1989, ha sido una organización de referencia en el análisis de estos fenómenos y problemáticas, así como en el impulso de medidas que promuevan la protección y el empoderamiento de quienes han sido forzados a huir.

www.womensrefugeecommission.org

Agradecimientos

La autora de este reporte es Diana Florez. La metodología y las herramientas de investigación fueron diseñadas por Diana Florez, Julianne Deitch y Lily Jacobi. Julianne Deitch, Kellie Leeson, Sadia Kidwai, Diana Quick, Melanie Nezer, Zain Lakhani y Ava McLaughlin Gagliardi realizaron revisiones y aportes adicionales. El informe ha sido diseñado por Rahildaris Marchena.

Extendemos nuestra más sincera gratitud a los proveedores de servicios, las organizaciones locales e internacionales y las autoridades gubernamentales que han contribuido a este estudio y han compartido generosamente sus conocimientos e ideas.

Todas las fotografías fueron tomadas por Diana Florez. Ilustraciones originales de Rahildaris Marchena.

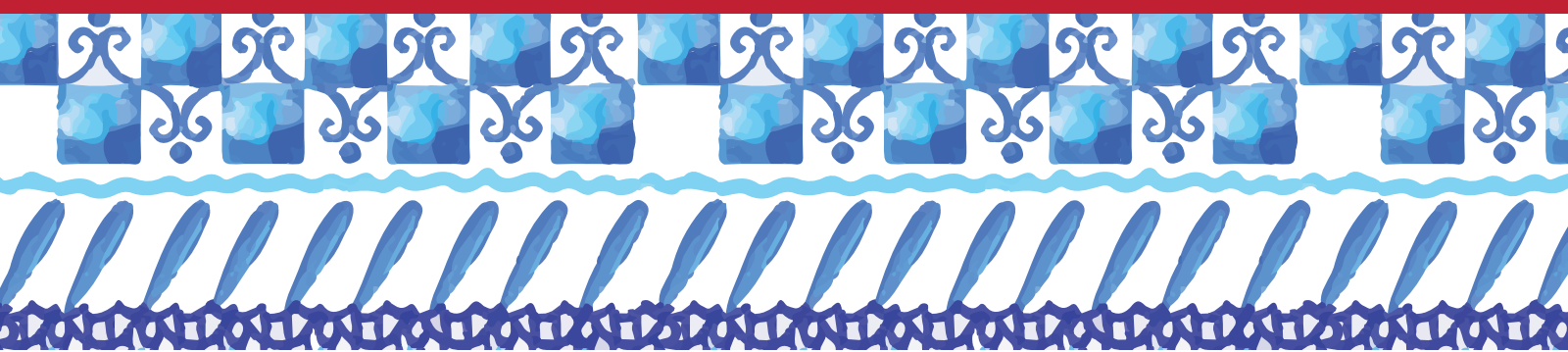
Para más información, póngase en contacto con Julianne Deitch, Directora Asociada de Investigación, en JulianneD@wrcommission.org.

Esta investigación y este informe han sido posibles en parte gracias al generoso apoyo de Myriad Canada, junto con las contribuciones de otros donantes anónimos. Estamos profundamente agradecidos por su compromiso con el avance de este trabajo.

© 2025 Women's Refugee Commission, Inc.

Women's Refugee Commission
15 West 37th Street, 9th Floor
New York, NY 10018
(212) 551 3115
info@wrcommission.org
womensrefugeecommission.org





Índice

Introducción.....	2
Metodología	3
Resultados	4
Discusión.....	21
Recomendaciones	26
Acrónimos y abreviaturas	29
Notas Finales	30
Referencias	31

Hallazgo nº 1 - Para muchas mujeres hondureñas, la migración no es una elección, sino una estrategia de supervivencia23

Hallazgo nº 2 - Incluso antes de los recortes de fondos estadounidenses, la respuesta a la VBG ya era estructuralmente frágil.....24

Hallazgo nº 3 - Disponibilidad en retroceso: escasa acción estatal frente al aumento de brechas en los servicios de VBG24

Hallazgo nº 4 - Acceso restringido, menor demanda: las sobrevivientes enfrentan barreras cada vez mayores para acceder a la protección.....24

Hallazgo nº 5 - Aumenta el riesgo de explotación para las mujeres migrantes25

Hallazgo nº 6 - La calidad de los servicios de VBG se ha deteriorado gravemente.....25



Mujeres y niños indígenas Lencas en Intibucá

Introducción

«Si los recursos para la ayuda humanitaria se restringen de manera repentina, si, por ejemplo, EE. UU. cambia sus políticas... aquí se produciría una crisis grave.»

Estas fueron las palabras de un funcionario de Naciones Unidas en 2023 para advertir sobre las posibles consecuencias del cambio en las políticas migratorias de EE. UU. para Honduras (WOLA, 2023, p. 29). Dos años después, este escenario comienza a materializarse tras la suspensión de la ayuda exterior estadounidense el 20 de enero de 2025. Se estima que, de la noche a la mañana, se esfumaron 184 millones de USD de financiación anual (Migration Policy Institute, 2025)¹. En materia de ayuda humanitaria, una reciente encuesta global, que evaluó el impacto de los recortes bajo la administración Trump, reveló que se habían eliminado 13,7 millones de USD en la financiación para Honduras, aunque es probable que la cifra total real sea mayor debido a las limitaciones del informe (OCHA, 2025)². Como resultado, más de siete millones de personas —un 64 % de la población nacional— dejaron de ser considerados como población objetivo para recibir asistencia (*Ibid.*).

Honduras enfrenta a una crisis en gran medida ignorada, y en acelerado deterioro, provocada no solo por las altas cifras de personas afectadas, sino también por la gravedad de las necesidades y la magnitud de los riesgos de protección no atendidos. La violencia sigue siendo generalizada, avivada por los desplazamientos forzados, la pobreza, la desigualdad, las crisis climáticas, la impunidad y la debilidad institucional. Los grupos criminales ejercen control territorial mediante extorsión, reclutamiento y violencia basada en género (VBG), lo que obliga a muchas personas a huir. Mujeres y jóvenes están más expuestos, y las tasas de feminicidio siguen estando entre las más altas del mundo (World Bank, 2023). Mientras tanto, más de 900.000 migrantes en tránsito han cruzado el país en los últimos dos años, lo que ha desencadenado una emergencia humanitaria en las fronteras (INM, 2025). A pesar de este panorama desolador, en 2024 el país fue clasificado como la novena crisis humanitaria de desplazamiento forzado más desatendida del mundo —la única en América Latina— y recibió menos de un tercio del financiamiento necesario para una respuesta efectiva (NRC, 2025). Los últimos recortes de la ayuda estadounidense han agravado una situación ya de por sí crítica.

El sector de VBG ha sido uno de los más afectados por los recortes más recientes de financiación. Según la evaluación mencionada anteriormente, el 29 % de los programas de VBG han sido cancelados en lo que va del 2025 (OCHA, 2025). Sin embargo, este reporte revela una realidad aún más alarmante: las organizaciones nacionales e internacionales e instituciones han reducido entre un 60 % y un 100 %, sus actividades en VBG, generando graves brechas en materia de protección³. Tres importantes ONG internacionales centradas en la atención a la VBG —que trabajan con poblaciones migrantes y retornadas— han anunciado que cerrarán sus operaciones en el país en los próximos meses.⁴ En consecuencia, innumerables mujeres y niñas enfrentan ahora un acceso drásticamente reducido a servicios esenciales y vitales. Esta drástica disminución en la disponibilidad de los servicios ocurre en un momento en que los riesgos de este tipo de violencia

van en aumento y sus impactos siguen siendo ignorados, debilitando aún más los sistemas de prevención y respuesta y llevando al límite la capacidad humanitaria. Como lo explica una organización de mujeres:

«Toda nuestra financiación procedía de EE. UU. y ha sido retirada por completo. Si hoy llega una mujer en peligro de muerte, no tenemos forma de ayudarla a trasladarse a otra ciudad. Estamos solas.»

Más allá de la interrupción inmediata de los servicios, la pérdida de apoyo estadounidense —que antes también abordaba las causas estructurales de la migración, incluida la VBG— amenaza con intensificar la violencia, la migración y el desplazamiento forzado en el largo plazo (Departamento de Estado de EE. UU., 2023).

En este contexto, esta investigación busca llenar un vacío crítico de evidencia sobre los desafíos que enfrentan las sobrevivientes y las mujeres en riesgo de sufrir VBG, con un enfoque particular en aquellas afectadas por el desplazamiento forzado, los retornos⁵ y las migraciones en condiciones precarias. Se evalúa la disponibilidad, accesibilidad y calidad de las respuestas a la VBG en Honduras y se examina cómo los cambios de políticas y la reducción de la financiación por parte de EE. UU. han impactado en la prestación y acceso a estos servicios. Si bien estudios anteriores han documentado estas deficiencias en la asistencia a las sobrevivientes (CDM, 2024; Florez, 2021) y otros han analizado el impacto regional y global de los recortes de las ayudas de EE. UU. (Migration Policy Institute, 2025), este es el primero que analiza la intersección de ambas dinámicas en un país con altos niveles de VBG y una profunda dependencia de la cooperación internacional. Liderado por la Women's Refugee Commission (WRC, Comisión de Mujeres Refugiadas) —una organización comprometida con mejorar las condiciones de vida y proteger los derechos de mujeres y niñas desplazadas— este informe expone las consecuencias devastadoras de los recortes de financiación sobre las respuestas de primera línea en Honduras.



El informe comienza describiendo el contexto del país para enmarcar la intersección entre la VBG y la migración (forzada). Aunque los datos demuestran un vínculo débil, la ausencia de una perspectiva de género suelen ocultar las experiencias de las mujeres y el papel que desempeña la VBG en la migración. Para las mujeres que retornan a Honduras —sobre todo desde de EE. UU. y México— el proceso puede aumentar los riesgos, incluida la posibilidad de represalias de aquellos de quienes huyeron inicialmente. La siguiente sección describe el estado de la prestación de servicios de asistencia a VBG previo a los recortes de financiación de EE. UU., destacando las limitaciones estructurales que ya existían antes de la crisis actual. A partir de este panorama, el informe pasa al análisis principal sobre cómo los cambios en la política y la financiación estadounidenses han desarticulado la prestación de servicios y debilitado la capacidad institucional para ofrecer una respuesta efectiva a la VBG. El informe concluye con hallazgos clave y recomendaciones de políticas para cerrar las brechas existentes y mejorar la eficacia y el carácter inclusivo de las intervenciones a la VBG.

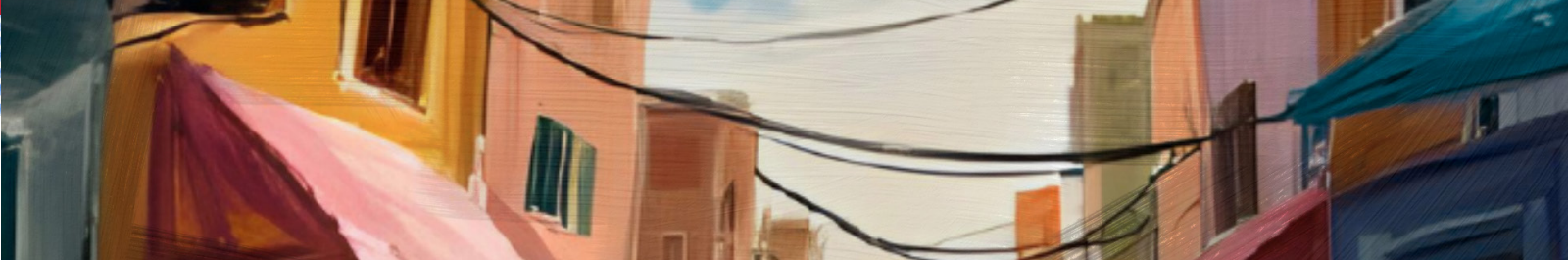
Metodología

Este informe se basa en una revisión documental de fuentes secundarias, que incluye bases de datos nacionales e internacionales, marcos legales y de política pública e informes institucionales, así como del trabajo de campo realizado en Honduras entre abril y mayo de 2025. En total se realizaron 25 entrevistas semiestructuradas con una amplia variedad de actores, incluidos funcionarios/as de Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales, organizaciones comunitarias de mujeres e instituciones.⁶ Las personas participantes fueron seleccionadas por su rol en la prestación de servicios relacionados con VBG, asistencia humanitaria y/o acompañamiento a personas migrantes. Todas las entrevistas se realizaron en español y se obtuvo consentimiento informado de cada participante.

Las visitas sobre el terreno se llevaron a cabo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y Omoa, entre las que se incluyó a los tres Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR). Adicionalmente, se realizaron entrevistas remotas con organizaciones ubicadas en La Ceiba e Intibucá. Estos lugares se seleccionaron en función de tres criterios clave: (1) la presencia de instituciones y organizaciones que trabajan en migración y/o VBG; (2) sus altas tasas de feminicidio, lo que ha promovido que se desarrollen mecanismos especializados de protección y rutas de atención; y/o (3) sus altos niveles de desplazamiento interno y migración internacional (CIPPDV, 2019; SIAMIR, 2025; UNAH, 2024). Estos criterios no fueron excluyentes y la mayoría de las localidades respondieron a más de uno de ellos.

Figura 1: Mapa de la región





El análisis fue inductivo y en él se combinó el análisis temático con el uso del software NVivo y la triangulación de entrevistas, revisiones de políticas y datos secundarios. En línea con las normas éticas de la WRC y el principio de «no hacer daño», este reporte excluyó intencionalmente entrevistas con sobrevivientes de VBG o con personas en situaciones de alta vulnerabilidad. Debido a la sensibilidad del tema, esta decisión buscó evitar riesgos de retraumatización o estrés adicional. En su lugar, el análisis se basa en los aportes de proveedores de servicios en primera línea, quienes trabajan de cerca las poblaciones afectadas y ofrecieron testimonios detallados sobre las carencias sistémicas y preocupaciones emergentes.

Este informe refleja la situación al 15 de junio de 2025 y debe interpretarse en consecuencia.

Entre las limitaciones principales se encuentran la falta de datos cuantitativos sobre la respuesta a la VBG (por ejemplo, número de mujeres sobrevivientes atendidas), el hecho de que no fue posible entrevistar a todos los actores relevantes y que algunas regiones con posibles mayores brechas de servicios están subrepresentadas en el reporte. No obstante, estas restricciones metodológicas, los hallazgos ofrecen una visión matizada y fundamentada del contexto actual y de las tendencias emergentes, y representan uno de los primeros intentos de documentar el impacto de los recortes de ayuda estadounidense en los servicios de VBG en Honduras.

Resultados

3.1 Movilidad compleja y en crisis: Comprender las tendencias migratorias en Honduras

Honduras es un país de aproximadamente 112 000 km² —una extensión similar al estado de Pensilvania— con cerca de 10 millones de habitantes, de los cuales poco más de la mitad son mujeres y niñas. Más del 55 % de la población vive por debajo del umbral nacional de pobreza, situándolo entre los países con mayor vulnerabilidad económica de América Latina (World Bank, 2024). A pesar de ciertos avances en la reducción de las tasas de homicidio durante la última década, Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica, con una tasa de homicidios de 25,3 por cada 100 000 habitantes (InSight Crime, 2024). Dicha cifra cuadruplica el promedio mundial y multiplica por más de veinte las tasas registradas en Alemania o España (UNODC y ONU Mujeres, 2024). Esta violencia crónica se ve agravada por la gobernanza deficiente y los altos niveles de corrupción: Honduras ocupa el puesto 154º de entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción (Transparencia Internacional, 2023).

3.1.1. La migración multidireccional es una nueva realidad

Aunque la migración ha sido históricamente parte fundamental de Honduras, en los últimos años se ha producido un cambio relevante: de ser principalmente un país de origen ha pasado también a funcionar como corredor de tránsito y retorno. Entre 2021 y mayo de 2025, aproximadamente 1 144 814 migrantes internacionales (el 36 % mujeres y niñas) pasaron por su territorio, con flujos que han variado significativamente (INM, 2025).

La cifra más alta se registró en 2023, con 545 043 personas en tránsito. Este aumento pronunciado fue impulsado, en gran medida, por la combinación de múltiples crisis en países como Venezuela y Haití, un incremento de la migración extracontinental y la creciente incertidumbre en torno a las políticas de inmigración estadounidense, lo que llevó a muchas

personas a adelantar su viaje (WOLA, 2023). En contraste, entre enero y mayo de 2025 solo 18 352 migrantes cruzaron por Honduras, frente a los 216 758 registrados en el mismo periodo de 2024, representando un descenso del 91 % (*Ibid.*).

Vale la pena destacar tres elementos frente a este fenómeno. En primer lugar, es posible que los datos oficiales no reflejen completamente la realidad actual. Varias fuentes han señalado un cambio en el comportamiento de las personas migrantes: a diferencia de años anteriores, ahora muchos de ellos evitan registrarse por miedo a que sus datos personales se compartan con las autoridades estadounidenses. Bajo las nuevas políticas migratorias, esta posibilidad es percibida como una exposición a mayores riesgos. Segundo, a pesar de la disminución registrada, el número de personas en tránsito sigue siendo considerable y continúa generando presión sobre las zonas fronterizas, sobre todo en un contexto donde las estructuras de asistencia humanitaria en los pasos clave de frontera continúan debilitándose. En tercer lugar, es probable que el descenso actual sea temporal. Como señaló un académico:

«La gente está esperando a ver qué pasa, a ver si algo cambia. Pero no dejarán de migrar. La violencia y la pobreza son más fuertes que el miedo a lo que les pueda pasar si migran.»

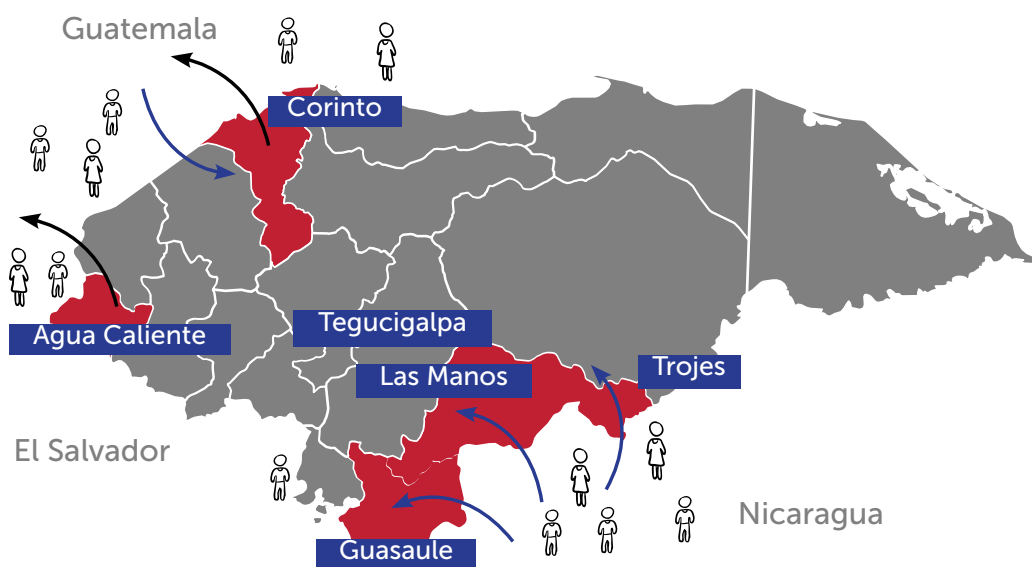
Figura 2: Rutas migratorias



3.1.2. Una nueva tendencia en las corrientes migratorias

Un cambio notable reciente, impulsado por las nuevas políticas migratorias estadounidenses, ha sido el aumento de la migración inversa. Mientras que solo 196 personas viajaron de norte a sur en enero de 2025, esta cifra aumentó a 4 438 en febrero, lo que representa un incremento del 2 364 % en solo un mes. El 41 % de las personas registradas que regresan hacia el sur eran mujeres y niñas, principalmente originarias de Venezuela, Colombia y Ecuador (OIM, 2025).

Figura 3: Flujo de entrada y salida de inmigrantes irregulares identificados en Honduras (ACH, 2022)



Como el registro no es obligatorio y las personas migran por múltiples rutas, es probable que las cifras totales sean aún mayores. Así mismo, dada la magnitud y rapidez del incremento, se prevé que la migración inversa mantenga este ritmo en los próximos meses. Varios actores entrevistados indicaron que muchas personas están regresando a sus países de origen. Sin embargo, no hay registros oficiales que validen dicha información. Lo que está claro, sin embargo, es que las solicitudes de asilo en Honduras han aumentado, tanto entre los que retornan del norte como los que llegan del sur. Según una fuente institucional, 144 de los 259 actualmente en trámite se presentaron en el primer trimestre de 2025. No obstante, la mayoría de las personas migrantes no tienen intención de quedarse; al no poder regresar a sus países de origen (por ejemplo, Venezuela), permanecen en un limbo, esperando se produzcan cambios en las políticas que les permitan ir hacia el norte.

Aproximadamente el 9,4 % de la población hondureña —unas 985 000 personas— vive actualmente en el extranjero, frente a las 156 000 de 1990 (OIM, 2024). La mayoría reside en EE. UU., y una parte importante se encuentra en situación migratoria irregular (Pew Research Center, 2024). La migración desde Honduras la emprenden principalmente jóvenes, sobre todo hombres, aunque la proporción de mujeres ha aumentado significativamente en los últimos años, y actualmente alcanza cerca del 40 % (INE y OIM, 2023).

Hacer un seguimiento de cuántas personas hondureñas migran hacia el norte no es fácil, ya que la mayoría de las salidas del país se registran como migración regular. Sin embargo, los encuentros en la frontera estadounidense sugieren una caída notable en el flujo migratorio. Mientras que en 2024 se registraron 40 778 encuentros con personas hondureñas, entre enero y mayo de 2025 solo se contabilizaron 8 034, lo que supone un descenso del 80 % en el mismo periodo (US Customs and Border Protection, 2025). Los estudios citan de manera reiterada las dificultades económicas como el principal factor que impulsa la migración hondureña, mientras los desastres naturales y la violencia aparecen con menor peso —aunque siguen siendo relevantes— (Banco Mundial, 2024; INE y OIM, 2023). Sin embargo, los datos sobre asilo revelan una relación más directa con la violencia. En 2023, Honduras ocupó el octavo lugar a nivel



mundial en número total de solicitudes de asilo, una posición notable para un país con poco más de 10 millones de habitantes (ACNUR, 2023). Además, solo en 2024, las personas hondureñas representaron más del 38 % de todas las peticiones registradas en México (3 213 de 8 413), lo que supera la cifra combinada de Cuba, Guatemala y Colombia, países que en conjunto suman más de 80 millones de habitantes (COMAR, 2024).

3.1.3. La deportación a Honduras, el retorno a una realidad más precaria

Las deportaciones a Honduras han crecido de manera sostenida en la última década, con un aumento más notorio recientemente, impulsado por el endurecimiento de las políticas migratorias en la región. Entre enero de 2014 y el 16 de junio de 2025, 267 745 personas fueron deportadas al país —el 28,6% eran mujeres y niñas— sobre todo desde EE. UU. y México (INM, 2025). En respuesta, Honduras ha ampliado sus programas de apoyo a personas deportadas y actualmente cuenta con tres CAMR administrados por organizaciones de la sociedad civil con financiación estatal y apoyo internacional.

Tras las recientes declaraciones de la administración Trump sobre la intensificación de las deportaciones masivas, el gobierno hondureño lanzó en el 2025 una nueva iniciativa: «Hermano, Hermana, Vuelve a Casa». El programa proporciona a los retornados 100 USD en efectivo, vales para mercado, opción de acceder a capital semilla para pequeños negocios y apoyo logístico para llegar a sus comunidades. Como señaló una organización:

«Antes, la gente llegaba con las manos vacías, ahora al menos tiene algo para empezar.»

Paradójicamente, a pesar de los anuncios de EE. UU., las deportaciones a Honduras disminuyeron un 9,85 % entre enero y mitad de junio de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024 (12 266 frente a 13 607) (*Ibid.*).⁷ Sin embargo, esta disminución, las cifras totales de deportaciones siguen siendo elevadas para un país que enfrenta altos niveles de precariedad social y económica. Asimismo, y como lo advierten quienes brindan asistencia, el verdadero reto comienza cuando las personas deportadas salen de los CAMR y regresan a entornos que, en muchos casos, son incluso más violentos e inestables que cuando huyeron.

Las personas retornadas en situación de riesgo entran a formar parte de un sistema de atención a población desplazada que ya es precario, y que continúa presionado por el aumento de este fenómeno. Honduras presenta uno de los niveles más altos de desplazamiento forzado en la región, con aproximadamente 247 090 personas afectadas por la violencia y otras 1 100 000 por desastres naturales (CIPPDV, 2019; Displacement Monitoring Centre, 2025). A pesar de la gravedad de la situación, el país fue clasificado entre las crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo en 2023 y 2024, con necesidades humanitarias en gran medida ausentes de los debates y agendas políticas mundiales (NRC, 2024, 2025). A nivel nacional, aunque a finales de 2022 se aprobó la Ley de Desplazamiento Interno, más de dos años después todavía no se han asignado recursos para su implementación. No resulta sorprendente, entonces, que las mujeres sigan recibiendo un apoyo estatal mínimo —si es que reciben alguno—, especialmente cuando se trata de abordar sus necesidades diferenciadas de protección (Flórez, 2021; Proceso Digital, 2024). La criminalidad generalizada, el machismo arraigado y la impunidad persistente continúan obligando a las mujeres a huir para sobrevivir, como se analizará en la siguiente sección.

3.2. Una «elección sin opciones»: La experiencia migratoria de las sobrevivientes de VBG en Honduras

Comprender la intersección entre VBG y la migración es clave para entender cómo la violencia determina la movilidad de las mujeres: desde la decisión de huir, los riesgos a los que se enfrentan durante el tránsito hasta los desafíos que experimentan al regresar. A pesar de la creciente feminización de la migración en Centroamérica, las causas y consecuencias vinculadas al género continúan invisibilizadas. La VBG rara vez se reconoce como un factor que impulsa la movilidad, y las experiencias de las mujeres suelen diluirse en categorías generalizadas (Florez, 2021; HIAS y ACNUR, 2023). Esta omisión es especialmente preocupante en Honduras, donde esta violencia es tan generalizada como extrema. En 2023, el país registró una de las tasas de feminicidio más altas de la región, 7,2 por cada cien mil mujeres, catorce veces más que en Guatemala y ocho veces más que en Costa Rica (CEPAL, 2024). En un solo día de trabajo de campo para este reporte, el 13 de mayo de 2025, tres mujeres fueron asesinadas en diferentes lugares; una de ellas a manos de un agente estatal (La Prensa, 2025). A modo de comparación, en EE. UU. — con una población 34 veces mayor— el promedio también es de tres mujeres asesinadas por día (Violence Policy Center, 2020).



Sin embargo, existe una diferencia significativa en relación con EE. UU. y otros países: mientras que en estos la mayoría de los feminicidios son cometidos en el contexto de relaciones de parejas o exparejas, en Honduras la mayoría está vinculada al crimen organizado (Luciano et al., 2020; UNODC y ONU Mujeres, 2024). Esta distinción es fundamental, como bien lo expresó la directora de una ONG nacional de mujeres:

«Las mujeres en Honduras no solo huyen de su agresor, huyen de toda una estructura criminal, a veces incluso de la policía, que las perseguirá hasta el último rincón para asesinarlas.»



La corrupción institucional arraigada y la colusión documentada entre fuerzas policiales y las redes de delincuencia organizada han debilitado gravemente la legitimidad de las instituciones de seguridad, lo que permite que la VBG persista con una impunidad casi total (HRW, 2025; ICG, 2023; Oxfam, 2018). En este contexto, las casas de refugios son escasas y las vías legales lentas o inaccesibles. Muchas sobrevivientes no ven a la policía como una fuente de protección, sino como parte de la amenaza. Como resultado, no suele haber ningún lugar al que acudir. Para muchas, huir del país se convierte en una «elección sin opciones»: el último recurso para sobrevivir ante una violencia sistémica y el abandono estatal. Otros datos son igual de alarmantes. **Una de cada dos mujeres en Honduras ha sufrido violencia a lo largo de su vida, frente a una de cada tres a nivel mundial (INE, 2022).** La violencia sexual es particularmente extendida: en la última década se han realizado más de 100 000 exámenes médico-forenses para este tipo de agresión, la mayoría de ellos a mujeres y niñas (UNAH, 2024). Solo entre 2022 y 2023 se denunciaron 7 620 casos de violencia sexual, aproximadamente una violación cada hora (CDM, 2024). Sin embargo, las cifras reales probablemente sean mucho más altas. Según una encuesta nacional sobre la violencia contra las mujeres y niñas, solo el 4 % de las sobrevivientes denunciaron ante a las autoridades (INE, 2022). Esta ya crítica situación se ve aún más deteriorada por la escasa disponibilidad y baja calidad de los servicios de atención a la VBG en Honduras, como se analiza en las siguientes secciones de este reporte.

3.2.1. La VBG, el factor invisible de la migración

A pesar de la prevalencia de la VBG, los registros administrativos suelen atribuir las causas de la migración de las mujeres principalmente a factores económicos. De las 178 443 mujeres deportadas de Honduras entre 2014 y enero de 2025, solo el 3,8 % declaró motivos relacionadas con la VBG para migrar, mientras que casi dos tercios señalaron factores económicos (INM, 2025; SIAMIR, 2025). La Encuesta de Migración y Remesas en Honduras reflejó tendencias similares: la mayoría de las personas migrantes (sin desagregación por sexo) citaron motivaciones económicas, mientras que solo el 1,8 % mencionó la violencia y apenas el 0,4 % se refirió a la violencia doméstica (INE y OIM, 2023). Además, formas específicas de VBG —como la violencia doméstica, la agresión sexual o la tentativa de feminicidio— no fueron incluidas entre las opciones de respuesta de la encuesta (*ibid.*) Muchos análisis actuales mantienen este enfoque, y dejan de lado la desagregación por sexo y privilegian las explicaciones de carácter económico. (Banco Mundial, 2024; World Bank, 2023). Estos datos revelan una ausencia crítica de la perspectiva de género, lo que contribuye a invisibilizar la VBG como un factor clave que impulsa la migración. Como explicó una organización, refiriéndose al subregistro de esta violencia en los datos de mujeres deportadas:

«En los centros de deportados, si una mujer dice que “no tenía dinero”, se la etiqueta como migrante económica; nadie ve que fue la violencia machista y la negligencia del Estado lo que la obligó a huir.»

Tomados de forma literal, estos datos pueden dar la impresión errónea de que las mujeres migran por las mismas razones que los hombres, ocultando las formas específicas de violencia que muchas enfrentan en Honduras. La VBG, sin embargo, está presente a lo largo de todo el ciclo migratorio, tanto como detonante como amenaza constante. Ni quedarse ni migrar representa una verdadera elección para muchas hondureñas: ambas rutas están atravesadas por la violencia y la incertidumbre. Se trata de lo que se ha denominado una ‘elección sin opciones’: una decisión impuesta por contextos de extrema inseguridad y ausencia de alternativas reales⁸. Como se ha documentado, los niveles de violencia contra las mujeres en Honduras son alarmantes, como lo son las fallas estructurales de las instituciones encargadas de protegerlas. Cinthia Martínez, una mujer afrohondureña, denunció a su pareja seis veces sin recibir protección. En 2020, él la asesinó. Su caso no es aislado: refleja la realidad cotidiana de muchas mujeres (Contracorriente, 2020). Como explicó una participante del estudio:

«Estamos atendiendo a una mujer cuyo excompañero es miembro de una mara y la intentó matar. No puede regresar a su casa, pero tampoco puede quedarse en Honduras. No tiene salida. ¿Qué opción le queda? ¿Migrar o quedarse y que la asesinen?»

Este es el dilema al que se enfrentan muchas mujeres, donde, incluso cuando se enfrentan a una situación de violencia en la que corre peligro sus vidas, el acceso a servicios de protección y asistencia sigue siendo limitado, inconsistente o completamente inaccesible.

Para las migrantes —particularmente aquellas sujetas a múltiples formas de exclusión— el riesgo de sufrir daños aumenta debido a vulnerabilidades acumuladas que enfrentan durante el tránsito. Aunque no existan datos oficiales que documenten las dimensiones de la VBG durante el tránsito por Honduras, una fuente de este informe reportó un aumento significativo de los casos identificados de violencia sexual en las fronteras: de solo 10 en 2022 a más de 100 por trimestre en 2024. Sin embargo, este aumento podría deberse más a una mejora en la detección que a un incremento real en los incidentes. Las organizaciones que apoyan a las migrantes estiman que aproximadamente el 90 % de violencia sexual ocurren en el Darién, aunque algunos también han ocurrido dentro de Honduras. En 2024, agentes humanitarios en la frontera del suroriente dieron la voz de alarma sobre el aumento de casos de VBG, trata de personas y trabajos forzados (OCHA, 2024). Sin embargo, la magnitud real del problema sigue siendo desconocida, ya que la mayoría de las sobrevivientes decide no denunciar o no tienen posibilidad de acceder a los servicios. Como relata una trabajadora humanitaria:

«Varias mujeres migrantes nos dijeron: “No quiero poner la denuncia”. Una mujer venezolana que intentamos apoyar fue violada en el oriente de Honduras, pero quería seguir adelante — pese al trauma que llevará por mucho tiempo.»

Para muchas, continuar la ruta pese a los abusos se convierte en una elección sin opciones, no porque el daño sea tolerable, sino porque detenerse, regresar o buscar ayuda no es una opción viable ni segura.

3.2.2. Un nuevo fenómeno: la migración inversa

Quizá la etapa menos documentada y más opaca del ciclo migratorio —particularmente en cuanto a la VBG— sea el proceso de retorno⁹. Esto incluye aquellos llamados «voluntarios», en los que muchas mujeres —solas o con niños y niñas— están regresando en lo que se conoce como migración inversa. Sin embargo, estos movimientos difícilmente pueden considerarse voluntarios en un sentido estricto; más bien reflejan una elección sin opciones, provocada por las políticas migratorias cada vez más restrictivas, el cierre de rutas de acceso al asilo y reasentamiento, así como los constantes abusos y la explotación en terceros países como México. Como señaló una entrevistada:

«Muchas mujeres están varadas actualmente en México, pero ese nunca fue su destino. Además, enfrentan constantes abusos tanto de la policía como de civiles. Una vez queda claro que las políticas de EE. UU. no van a cambiar, los retornos masivos arrancarán.»

Como se analizará más adelante, la ausencia casi total de asistencia humanitaria para las sobrevivientes de VBG en el contexto de la migración inversa es motivo de gran preocupación, especialmente desde que la mayoría de las organizaciones humanitarias se han retirado de las zonas fronterizas debido a los recortes de financiaciones estadounidenses.

El ejemplo más evidente del uso cuestionable del término «retorno voluntario» es el nuevo programa de autodeportación estadounidense, CBP Home —lanzado en 2025 para sustituir a CBP One. Aunque se presenta como voluntario, se da en un contexto donde no hay una verdadera libertad de decisión. En mayo de 2025, treinta y ocho personas hondureñas fueron los primeros en regresar bajo esta iniciativa, recibiendo cada uno mil USD del gobierno de EE. UU. y siendo

trasladados en mejores condiciones, como, por ejemplo, sin el uso de esposas. Cuatro niños nacidos en EE. UU. también regresaron con sus padres. En al menos un caso documentado, una mujer aceptó regresar porque su esposo había sido deportado; otras personas hablaron del temor constante y de optar por regresar para evitar ser detenidas. Una dinámica similar podría afectar pronto a más de 80 000 hondureños (43 % mujeres) que viven en EE. UU. y que podrían verse obligados a regresar si el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) no se renueva en julio de 2025 (UNAH, 2025). **Aunque se presentan como voluntarios, muchos de estos retornos surgen del miedo, la coerción o la falta de alternativas**, dejando poco margen para una elección real. Muchas de las personas que podrían ser afectadas han vivido en este país durante décadas, y se estima que 33 000 niños ciudadanos estadounidenses viven actualmente en hogares con titulares de TPS hondureños, lo que muestra el grave impacto que tendría la cancelación de este estatus, incluido el riesgo de separaciones familiares forzadas a gran escala (*Ibid*).

3.3. Un sistema frágil: Debilidades en la respuesta a la VBG

El periodo entre 2022 y 2024 fue ampliamente descrito por las personas entrevistadas como un punto de inflexión en la visibilidad de la VBG en Honduras. Durante estos años, el tema adquirió mayor relevancia en las agendas institucionales y humanitarias, impulsado por el aumento de los flujos migratorios mixtos, el trabajo persistente de las organizaciones nacionales de mujeres y de algunos actores internacionales. Este impulso se vio reforzado por la adopción de marcos legales claves¹⁰. Los actores humanitarios lograron avances importantes en la coordinación de esfuerzos para abordar los impactos de VBG, especialmente en contextos de migraciones y desplazamiento forzado. Como señala una ONG internacional:

«En las fronteras pudimos establecer rutas de derivación, capacitar al personal y crear protocolos de gestión de casos transfronterizos. Fue un modelo relativamente exitoso de atención a la VBG.»

Determinar si esta mayor visibilidad se tradujo en un aumento del apoyo por parte de instituciones nacionales y de la cooperación internacional no es sencillo, debido a la limitada y fragmentada disponibilidad de datos. Sin embargo, algunos indicadores permiten observar avances parciales. A nivel nacional, el presupuesto hondureño asignado a las casas refugio para mujeres víctimas aumentó de 400 000 USD en 2022 a 1,2 millones USD en 2023 y 2024 (República de Honduras,





2022, 2023, 2024). El financiamiento para la prevención de VBG también aumentó de 200 000 USD a 800 000 USD en el mismo periodo. Aunque estos aumentos son significativos, persisten dudas sobre su implementación e impacto real (ver siguiente sección). En general, la inversión sigue siendo insuficiente en relación con la magnitud del problema.

A nivel de cooperación internacional, el financiamiento humanitario ha sido aún más limitado: para finales de 2024, solo se había recibido el 8 % de los recursos necesarios para las intervenciones en VBG incluidas en el Plan de Necesidades Humanitarias (Subclúster de VBG, 2025). Dentro del sistema de Naciones Unidas, el abordaje a esta forma de violencia continúa siendo una de las áreas más desfinanciadas en la respuesta humanitaria y las agencias especializadas que la abordan suelen recibir una proporción mucho menor del financiamiento en comparación con otras áreas de intervención. Como advirtieron varias organizaciones entrevistadas, incluso antes de los recientes recortes de fondos de EE. UU., movilizar recursos para este trabajo ya era un desafío, a pesar de los discursos de los donantes. En palabras de una participante:

«No siempre resulta atractivo para los donantes porque el impacto no es inmediato ni visible —no es como repartir comida o kits de higiene. No hay foto para las redes, solo el trabajo silencioso de salvar la vida de una mujer.»

Otra preocupación recurrente es que la tendencia de la mayoría de los donantes a financiar iniciativas a corto plazo y con alcance muy localizado, lo que limita la posibilidad de ofrecer una atención integral y un acompañamiento sostenido. Como señaló una ONG internacional:

«El financiamiento para la VBG se enfoca en estos pequeños proyectos de emergencia [...] pero abordar la violencia contra las mujeres es un proceso de largo plazo —no se puede hacer en un proyecto ocho meses.»

En contraste, varias personas participantes destacaron que, antes de 2025, los programas financiados por EE. UU. tenían mayor estabilidad y duración —en general al menos tres años— y permitían una mejor coordinación, atención y procesos continuos de fortalecimiento de las capacidades.

3.3.1. Avance en papel, brechas en la práctica

Además de las limitaciones presupuestarias, los avances normativos aún no se han concretado en acciones efectivas. La mayoría de las leyes y políticas aprobadas destinadas a apoyar a las sobrevivientes de la VBG siguen sin reglamentarse, es decir, no cuentan con fondos asignados ni establecen mecanismos para garantizar su cumplimiento. Un ejemplo ilustrativo es el Protocolo de Atención Integral a Personas Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual (en adelante Protocolo de Atención a la Violencia Sexual), aprobado en 2022, junto con la revocación de la prohibición de las pastillas anticonceptivas de emergencia impuesta en 2009. En ausencia de financiamiento específico, el protocolo sigue sin aplicarse (Contra Corriente, 2024). Señaló una médica que trabaja con sobrevivientes,

«La mayoría de los centros de salud aún exige que las sobrevivientes presenten una denuncia policial antes de recibir atención, y muchos siguen negando el acceso a los PEP¹¹ y a las pastillas de emergencia —aun dos años después de la aprobación del protocolo.»

La transferencia gradual de la atención en casos de violencia sexual por parte de Médicos Sin Fronteras (MSF) —una organización de larga trayectoria y de confianza— a las instituciones estatales en Tegucigalpa y otras ciudades ha agravado las deficiencias del sistema, lo que deja con frecuencia a las sobrevivientes sin recibir la asistencia adecuada. El retiro recientemente anunciado de MSF de zonas fronterizas clave —donde brindaba atención a poblaciones migrantes— y la transferencia de esa responsabilidad a las autoridades nacionales han incrementado las preocupaciones sobre la capacidad del Estado para cubrir ese vacío. Esto eleva

el riesgo de que se repitan fallos anteriores y de que la respuesta a la VBG se debilite aún más.

En Honduras, la atención a la VBG depende en gran medida de sistemas de derivación y de gestión de casos donde las personas sobrevivientes son remitidas a diferentes entidades según sus mandatos institucionales, especialización y su presencia local (CDM, 2018). Por ejemplo, los proveedores de servicios jurídicos refieren los casos a los servicios de asistencia médica o psicosocial, mientras que el personal de salud también puede derivar a las sobrevivientes con riesgos a los mecanismos o entidades responsables de protección. El financiamiento de EE. UU. permitió anteriormente que muchos municipios establecieran rutas de derivación adaptadas a las capacidades locales. La Figura 4 ilustra la ruta de derivación de casos de VBG en Danlí, una ciudad clave en la frontera suroriental de Honduras que atiende a mujeres migrantes, desplazadas y en situación de riesgo¹². Sin embargo, persisten brechas importantes, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes, donde las pequeñas organizaciones de mujeres suelen ser el único recurso disponible. En Atlántida, un departamento cuya población es en su mayoría afrodescendiente, algunos grupos de mujeres han intervenido directamente, sacado a las sobrevivientes de sus casas tras intentos de feminicidio, ante la inacción de la policía. Incluso en Tegucigalpa, lideresas comunitarias manejan líneas telefónicas de emergencia y prestan asistencia directa, muchas veces asumiendo riesgos personales considerables. Aunque las redes de derivación aún funcionan en algunas ciudades clave, estas se han debilitado gravemente debido a los recortes en el financiamiento estadounidense y al retiro de socios estratégicos. Las consecuencias de estas pérdidas se analizan con más detalle en la siguiente sección.

Figura 4: Vía de derivación intersectorial para casos de VBG, 2024





3.4 ¿Cómo afectan los recortes de la ayuda de EE. UU. a los servicios de atención para la VBG?

Honduras ha sido uno de los países más afectados de la región por los recientes recortes de fondos estadounidenses, debido en gran parte a su alta dependencia de la cooperación internacional. Solo en 2024, Honduras recibió 184 millones de USD, equivalentes al 0,53 % de su PIB y al 74 % de toda la ayuda exterior recibida ese año (Confidencial HN, 2025; Migration Policy Institute, 2025). A principios de 2025, Honduras contaba con 18 programas activos relacionados con migración financiados por USAID por un valor aproximado de 357,8 millones de USD, con ejecución entre 2022 y 2029, según un informe presentado por la administración Trump al Congreso este año (Masood, 2025). Solo algunos contemplaban de manera explícita intervenciones en materia de VBG. Tras el cambio de gobierno en EE. UU. a inicios de 2025, todos los proyectos han sido cancelados, lo que implicó la pérdida de 135,6 millones de USD en fondos que estaban por ejecutarse (*Ibid.*). Estas cifras no logran reflejar completamente el impacto profundo que la pérdida repentina de fondos tiene en la vida de las mujeres. Como señaló una organización internacional:

«Teníamos a 60 sobrevivientes que, tras seis meses de formación, estaban a punto de recibir su capital semilla. Dos días antes, cancelaron el proyecto. Los programas que las ayudaban a escapar de los abusos o del control de las pandillas desaparecieron sin previo aviso ni alternativas.»

Esta sección presenta un análisis cualitativo sobre cómo los recientes cambios en la política exterior estadounidense —en particular el retiro abrupto de fondos— han afectado a los servicios VBG en Honduras. El análisis aborda las repercusiones en la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la atención, evidenciando cómo el retiro de estos programas ha agravado la fragilidad del sistema. Varias personas entrevistadas enfatizaron que este tema ha sido en gran medida silenciado y rara vez se aborda en el discurso público o político, a pesar de sus profundas implicaciones para la vida de las mujeres. Según una organización internacional:

«Es como si, desde el momento en que Trump llegó al poder, todo el trabajo relacionado con la VBG se hubiera desaparecido, prohibido, borrado de las prioridades de los donantes y de las agendas gubernamentales.»

3.4.1 Disponibilidad de los servicios para la atención de la VBG

«Las mujeres que están siendo deportadas se fueron porque su vida corría peligro. Ahora que regresan, enfrentan el doble o incluso el triple de riesgo y, tristemente, no hay fondos ni recursos para apoyarlas.»

Esta cita de la directora de una organización comunitaria refleja una crisis más amplia: la disponibilidad de servicios de VBG ha disminuido drásticamente tras la reducción o finalización en 2025 de programas relacionados implementados por 21 organizaciones e instituciones locales, nacionales e internacionales. Como señalaron muchos agentes humanitarios, los servicios esenciales para sobrevivientes —incluido el apoyo psicosocial, la asistencia legal y el empoderamiento económico— antes llegaban a mujeres en zonas de alto riesgo y en tránsito.

Las personas entrevistadas también informaron que los servicios de VBG en los Centros de Atención para Migrantes Irregulares (CAMI) se han reducido significativamente o han sido eliminados, ya que muchos de sus socios estratégicos eran financiados por EE. UU. La Secretaría de la Mujer —una entidad gubernamental que anteriormente tenía presencia en algunos CAMI y recibía apoyo mediante organizaciones socias financiadas por EE. UU. — también se ha retirado como consecuencia de los recortes. En varios municipios con altas tasas de feminicidio, también se retiró al personal financiado por programas respaldados por EE. UU., debilitando aún más la protección en primera línea. Como resultado, servicios críticos como la gestión de casos, la asistencia de emergencia y la atención con enfoque sensible al trauma son ahora extremadamente limitados o inexistentes. Ante la ausencia de nuevos fondos que sustituyan estos recortes, varias personas entrevistadas expresaron su preocupación por la limitada capacidad —y voluntad política— del Estado para cubrir estas brechas, especialmente en un año electoral (2025) en el que los temas de género parecen relegados y fuera del debate de los principales partidos políticos.

El vacío dejado por la cancelación de programas financiados por EE. UU. no está siendo cubierto actualmente por el gobierno hondureño. Varias personas entrevistadas señalaron que en zonas urbanas de alto riesgo, la salida de organizaciones internacionales y nacionales no se ha visto seguida por la reactivación de servicios, sino por el silencio y por el creciente control que ejercen los grupos criminales sobre la vida de las mujeres. En las fronteras, se reporta que el crimen organizado está aprovechando este vacío. Tal como se ha documentado recientemente en Costa Rica, en Honduras también se observa cómo las redes criminales se aprovechan de la falta de mecanismos de protección (WRC & Refugees International, 2025). El siguiente testimonio ilustra un patrón reiterado en múltiples entrevistas:

«Antes, los grupos criminales se contenían porque estábamos allí —ahora, nadie vigila. Toman a las mujeres apenas cruzan, las obligan a prostituirse en la capital durante una semana, y cuando cumplen su cuota, llega el siguiente grupo— la mayoría son mujeres venezolanas.»

Uno de los indicadores más evidentes del deterioro en los servicios de protección es la situación de las casas refugios para sobrevivientes de VBG. Históricamente manejados por organizaciones locales y con escaso apoyo estatal, estos espacios han cubierto una brecha crítica en la respuesta a esta forma de violencia (Mejía, 2023). Aunque en 2024 se aprobó la Ley de Casas Refugio y se incluyó una partida presupuestaria en el 2022-2024, su implementación no ha avanzado. Altamente dependiente de los fondos estadounidenses, la Red de Casas Refugio sufrió un golpe importante en febrero de 2025, cuando se cancelaron cuatro proyectos respaldados por EE. UU. destinados al sostenimiento de estos lugares. Como han confirmado varias organizaciones, la respuesta del gobierno ha sido limitada: la ley sigue sin regularse y los fondos asignados se han reorientado hacia la construcción de nuevos refugios, ninguno de los cuales había iniciado obras al momento de la elaboración de este informe. El impacto ha sido inmediato y grave. Varias casas refugio funcionan ahora con servicios drásticamente reducidos, y uno en San Pedro Sula —que estaba en proceso de renovación y se preparaba para atender a mujeres desplazadas y migrantes— se vio obligado a cerrar en abril de 2025 por falta de financiamiento.



Más allá de contar con un alojamiento seguro, estos espacios ofrecen asistencia legal, apoyo psicosocial, protección infantil y asistencia humanitaria de emergencia.

No obstante, el deterioro en la disponibilidad de servicios de VBG no se limita al debilitamiento de las casas refugio. Como se ha mencionado anteriormente, el apoyo a sobrevivientes en Honduras ha dependido históricamente de redes de derivación que las conectan con la asistencia especializada a través de redes de instituciones y organizaciones. En el contexto actual, estas redes se han desarticulado. Una organización que ofrecía apoyo psicológico lo explica claramente:

«No queda nadie a quién remitir a las mujeres. Nuestros casos exitosos eran los que lograban acceder a un acompañamiento integral, con asistencia legal y apoyo económico. Ahora es como tocar una puerta tras otra, y que ninguna se abra.»



Esto no significa que instituciones estatales como el Ministerio Público o el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) hayan dejado de funcionar. El problema radica en que estos organismos dependían de servicios complementarios —como la atención psicosocial, los mecanismos de protección y el empoderamiento económico— que antes prestaban estas organizaciones de cooperación y nacionales.

Ahora, muchos de esos socios han retirado o interrumpido sus servicios. Resulta especialmente llamativo cuántas veces fueron mencionadas estas organizaciones durante las entrevistas como aliados clave para la derivación de casos, solo para confirmar más adelante que ya no ejecutaban esos programas. Así lo expresó una organización local al referirse a este dismantelamiento:

«No tenemos dinero ni seguridad para ayudar realmente a las sobrevivientes. Antes, las podíamos derivar a distintos socios para que recibieran terapia, atención médica y apoyo humanitario. Ahora, estos aliados han desaparecido y hacemos lo que podemos, pero es muy duro.»

El resultado es un sistema de protección fragmentado y debilitado, que deja a muchas sobrevivientes sin el acompañamiento coordinado e integral que se requiere.

Esta ruptura en la coordinación es evidente al comparar el panorama actual de derivaciones con los mapas de los servicios anteriores. **La Figura 5 se construye a partir de la ruta presentada**

en la **Figura 4** y evidencia cómo se ha reducido o eliminado la disponibilidad de los servicios en materia de salud de VBG en Danlí. Los símbolos de alerta indican las reducciones según la información compartida por diversos actores y no necesariamente por las organizaciones representadas en esta ruta de derivación. Como consecuencia de esta erosión sistémica, la red de protección para las mujeres con riesgos de protección y asistencia se ha vuelto aún más limitada y fragmentada.

Figura 5: Vía de derivación intersectorial actualizada para casos de VBG



3.4.2. Accesibilidad y utilización de los servicios para la VBG

El acceso y la utilización de los servicios para las sobrevivientes de VBG en Honduras se han reducido de forma drástica tras los recortes de financiamiento por parte de EE. UU. Una de las principales consecuencias ha sido el cierre o la reducción de programas, sobre todo en las zonas fronterizas. En la frontera suroriental, el espacio humanitario solía albergar varias organizaciones especializadas en abordar los impactos de la violencia con enfoque de género en personas migrantes. Al igual que en otras partes de la región Centroamericana, estos servicios están siendo desmantelados en Honduras (WRC y Refugees International, 2025). Según las personas entrevistadas, solo cinco de las 27 organizaciones que anteriormente operaban en la frontera suroriental se espera que permanezcan activas a mediados de 2025. La mayoría de los actores que trabajan en VBG han cerrado o reducido drásticamente sus actividades. Si bien en principio estos programas se diseñaron para abordar cuestiones migratorias, sus beneficios se ampliaron: fortalecían las capacidades institucionales municipales y brindaban apoyo a otros grupos en situación de riesgo, como personas LGBTI. Estas iniciativas también contribuyeron a establecer rutas de derivación en ciudades con altos niveles de VBG. Con el retiro de actores clave, los

servicios esenciales y vitales —como el apoyo psicológico, la atención de emergencia y el acceso a profilaxis posexposición (PEP)— han sido suspendidos o severamente reducidos. Hasta la fecha, no se han anunciado planes concretos para restablecer o sustituir estos servicios.

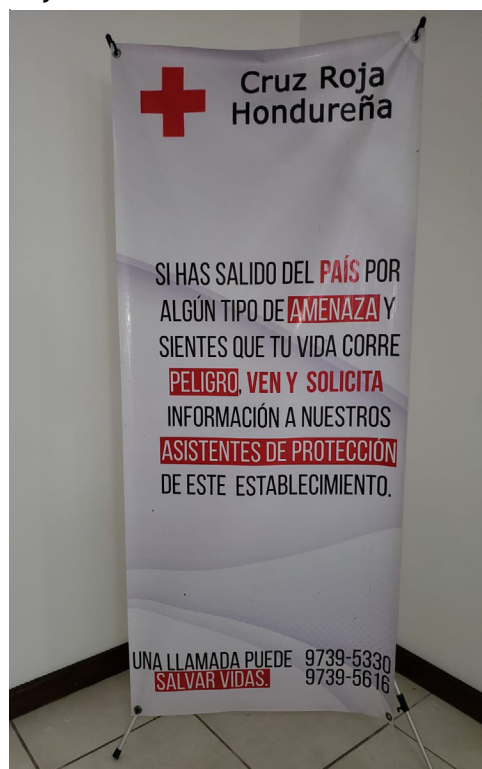
Como se mencionó previamente, la situación es especialmente crítica para las mujeres que regresan de EE. UU. o de México. Las rutas de retorno son informales, no están demarcadas y carecen de sistemas de asistencia, condiciones que afectan de forma desproporcionada a las mujeres que a menudo recurren a estas vías por no poder pagar a los traficantes. Aunque los CAMI siguen operando en puntos de entrada clave como Choluteca y Danlí, la mayoría de las personas retornadas no pasan por estos centros ni acceden a los servicios disponibles. Según organizaciones humanitarias, esto se debe no solo a la naturaleza voluntaria del registro ante las autoridades migratorias y a la lejanía de los CAMI de las rutas migratorias de retorno, sino también al temor generalizado entre las personas migrantes de que su información personal sea compartida con las autoridades estadounidenses. En los casos de VBG, aunque el personal de los CAMI está recibiendo formación ante la inminente retirada de MSF, según información recogida, aún no están preparados para identificar ni brindar atención especializada a las sobrevivientes. Como consecuencia, muchas mujeres —con frecuencia expuestas a múltiples situaciones de violencia durante el trayecto— atraviesan el país sin recibir ningún tipo de asistencia. Como lo expresó una organización humanitaria:

«No hay programas para ellas, no porque no exista la necesidad, sino porque las estructuras que antes apoyaban a las sobrevivientes de VBG durante su tránsito hacia el norte ya no existen.»

El resultado es una preocupante brecha de protección: las mujeres más expuestas al riesgo están quedando fuera del sistema, sin acceso a servicios y sin saber adónde acudir.

En cuanto a las mujeres deportadas, su acceso a los servicios de asistencia se ha visto aún más limitado. Esto se debe a la reducción de entre el 30 % y el 40 % de socios de apoyo en los CAMR, previamente financiados por EE. UU. y que se encargaban de apoyar la identificación de casos, brindar atención psicológica y realizar derivaciones en materia de protección. Antes de los recortes recientes, estos centros contaban con dos o tres psicólogos y médicos, cuyas plazas estaban financiadas por dicha cooperación. Actualmente, una sola persona (por ejemplo, una psicóloga) tiene que encargarse de atender a más de 500 retornados en un solo día. A pesar del compromiso observado en el personal de los CAMR, resulta prácticamente imposible identificar de manera adecuada los casos de VBG u ofrecer asistencia efectiva en estas condiciones. Las entrevistas de evaluación inicial a las personas migrantes duran apenas cinco minutos y, muchas veces, se realizan en espacios compartidos, sin privacidad, lo que limita la posibilidad de revelar experiencias de violencia. El temor al estigma o a las represalias también impide a muchas mujeres hablar. Aunque en los CAMR (Figura 6) hay afiches que alientan a las personas a denunciar situaciones de riesgo de protección, la angustia emocional y el corto tiempo

Figura 6: Cartel informativo de Cruz Roja Hondureña en el CAMR de Omoa



El cartel dice: Si ha salido del país debido a cualquier tipo de amenaza y cree que su vida corre peligro, venga a solicitar información a nuestros asistentes de protección de este centro. Una llamada telefónica puede salvar vidas. 9739-5330 / 9739-5616.

de permanencia en estos centros continúan siendo obstáculos significativos. Una funcionaria reflexionó:

«Nuestro mayor reto como estado es identificar los casos de VBG. En EE. UU., las mujeres no logran hablar: no hay traductor, están vigiladas por hombres. Y cuando llegan aquí, les sigue costando hablar sobre la violencia que sufrieron.»

Aunque las deportaciones masivas han disminuido desde 2024, los testimonios sobre abusos durante el proceso persisten de manera preocupante. Las personas entrevistadas hablaron sobre el trato degradante al que se enfrentan las mujeres deportadas desde EE. UU., incluyendo haber sido obligadas a quitarse la ropa interior y la negación del acceso a productos de higiene menstrual. Una psicóloga relató:

«Una deportada muy joven fue violada por otra mujer mientras se encontraba en un centro de detención estadounidense. Fue agredida con una botella y no tenía a quien acudir para denunciar la agresión. Llegó aquí completamente destrozada, con el cuerpo y el espíritu rotos.»

Tal y como lo ha advertido la WRC, estos casos reflejan las consecuencias de la disminución del monitoreo y la supervisión en los centros de detención de migrantes, cuyo funcionamiento es cada vez menos visible y controlado tras el desmantelamiento de los principales mecanismos de control (2025). Según informantes clave, muchas mujeres reportaron acoso sexual, violencia física y agresiones verbales por parte de agentes estadounidenses. Muchas habían huido de la VBG, pero bajo la administración Trump, solicitar o recibir asilo se ha vuelto casi imposible, independientemente de la gravedad del caso (Cleaveland & Waslin, 2025). Al regresar, los riesgos suelen persistir o incluso agravarse. Algunos funcionarios indicaron que los agresores o traficantes esperan fuera de los CAMR; otras mujeres evitan buscar ayuda debido a su profunda desconfianza en las autoridades. Incluso cuando solicitan protección, las opciones siguen siendo limitadas, sobre todo tras la cancelación de los programas de reasentamiento y los recortes en ayuda humanitaria. Con profunda frustración, una asistente social explicó:

«A las mujeres deportadas se les da un número de teléfono y se les dice que alguien las llamará, pero nadie lo hace. Una mujer dijo: "Si salgo del centro de deportados, me van a matar". Quienes ofrecen la protección se olvidan de que estamos tratando con casos de vida o muerte.»



Centro de Atención al Migrante Retornado Omoa.



El impacto más devastador de los recortes de financiación no es solo la pérdida de los programas, sino cómo se ha reconfigurado la respuesta a la VBG, lo que ha dificultado aún más su identificación, visibilización y atención. La demanda de servicios ha disminuido; ha sido silenciada. Una trabajadora de atención directa observó:

«Ya antes había poco financiamiento, y ahora prácticamente ha desaparecido. Las mujeres están más expuestas. En los barrios peligrosos, venían a contarnos lo que les pasaba. Ahora, están prácticamente solas.»

El desmantelamiento de las iniciativas comunitarias —muchas de ellas financiadas antes por USAID— ha sido especialmente perjudicial. Estas redes en las colonias generaban confianza y facilitaban a las sobrevivientes de VBG el primer contacto seguro con el sistema de apoyo. Su ausencia ha hecho que muchos casos ya no sean detectados. Las casas refugio han reportado menos casos, pero no porque haya disminuido la violencia, sino porque las redes comunitarias de mujeres —que antes eran la principal fuente de referencia— han desaparecido. Muchos de estos programas formaban liderazgos comunitarios para brindar apoyo psicosocial y facilitar derivaciones, especialmente en zonas donde acudir a la policía no era una opción segura. Su cierre ha dejado un vacío crítico. En la actualidad, innumerables mujeres enfrentan los abusos en silencio, sin nadie a quién acudir ni un lugar al que recurrir.

3.4.3. Calidad de los servicios para la VBG

«El nivel de especialización que teníamos antes para implementar programas y proyectos contra la VBG —personal formado para prestar asistencia y con un profundo conocimiento de las rutas de derivación— ya no existe.»

La disminución de la calidad de los servicios para las mujeres sobrevivientes surgió como tema recurrente entre las personas participantes de este reporte, como lo evidencia este testimonio de este actor internacional. Si bien algunas organizaciones humanitarias siguen operando con recursos mínimos, muchos ya no ofrecen asistencia especializada o carecen de socios con la capacidad técnica necesaria para garantizar una atención centrada en las personas sobrevivientes de VBG. Una organización compartió que, debido a los recortes de personal, actualmente procesan todos los casos —incluidos los de mujeres sobrevivientes— a través de un mismo sistema de evaluación de riesgos, sin contar con personal capacitado para identificar o responder a los riesgos específicos que enfrentan. Sin los enfoques adecuados, las respuestas de protección resultan inadecuadas desde el principio. Los programas más afectados son los que se enfocan en el empoderamiento económico y la reintegración de mujeres desplazadas y deportadas. Estos componentes son esenciales para la recuperación a largo plazo, pero su cancelación o disminución ha dejado a muchas mujeres atrapadas en ciclos de dependencia y vulnerabilidad continua. En un país en el que la mayoría de las mujeres viven con menos de 5,50 USD al día, reconstruir una vida sin ese apoyo resulta casi imposible.

La calidad de la atención también se ha deteriorado, debido a que las organizaciones nacionales se ven obligadas a priorizar la recaudación de fondos por encima de la prestación de servicios. Una organización de mujeres relató:

«Estamos intentando sobrevivir organizando ventas de garaje... incluso estamos planeando un gran bingo. Hemos tenido que reasignar al personal del trabajo directo a búsqueda de recursos solo para mantener abiertas nuestras puertas. Apoyar a las sobrevivientes es nuestra misión, pero no tenemos otra opción.»

Este cambio ha desviado recursos esenciales y atención de los servicios básicos, lo que erosiona la coherencia, la calidad y la sostenibilidad de la atención disponible para mujeres y niñas.

Este deterioro de la calidad se ve agravado por otros desafíos críticos. Según varios informantes,



gran parte de la formación del personal —tanto de las instituciones gubernamentales como de las organizaciones locales— estaba financiada previamente por USAID. Con la retirada de estos recursos, mantener la capacidad técnica se ha vuelto muy complejo. Cientos de personas capacitadas —con conocimientos sólidos sobre procedimientos y atención centrada en las sobrevivientes— han sido despedidas. La mayoría no ha sido, ni probablemente será, absorbida por otras instituciones u organizaciones, lo que ha provocado una brecha significativa en experiencia y calidad en la asistencia.

Las personas participantes también destacaron la creciente escasez de insumos esenciales, lo que socava aún más la calidad de los servicios. En los puntos fronterizos clave, artículos esenciales para atender a las sobrevivientes —como kits de higiene femenina, kits de higiene para niños (que incluyen leche de fórmula para bebés) y suministros médicos básicos— se han reducido de manera drástica o se han eliminado por completo. Para las sobrevivientes hondureñas de VBG, el apoyo que antes garantizaba el acceso a servicios —como el transporte a audiencias judiciales para mujeres en zonas remotas o el acceso a medicamentos psiquiátricos— ha desaparecido casi por completo. Una organización internacional reflexionó así:

«Teníamos el fondo humanitario que nos permitía asistir a las sobrevivientes que ni siquiera solían tener dinero para el autobús para huir o para comprar medicamentos para tratar los traumas. Ya no tenemos ese fondo, y realmente salvaba vidas.»

Discusión

¿Por qué se centra este informe en Honduras, cuando otros países de la región enfrentan comparables recortes de financiación de EE. UU. —o incluso más severos— y a niveles igualmente preocupantes de VBG? Aunque la magnitud de la migración y deportación de mujeres, así como la prevalencia de esta forma de violencia, influyeron en la decisión, hay tres factores adicionales que hacen de este país un caso particularmente crítico:

- * Los servicios de atención a la VBG ya estaban fragmentados, carecían de recursos suficientes y dependían en gran medida de la ayuda internacional. La suspensión de la financiación estadounidense no solo ha debilitado este sistema frágil, sino que lo empujó al borde del colapso.
- * Honduras representa un punto crítico para un sistema de protección ya debilitado y muy dependiente de la ayuda internacional. Ofrece lecciones clave para otros países que enfrentan dinámicas similares, tanto a nivel regional como mundial. El caso demuestra cómo el retiro abrupto de recursos externos —especialmente en contextos con escaso apoyo estatal— puede dismantelar rápidamente la prestación de servicios, interrumpir la coordinación y erosionar la confianza de las sobrevivientes. En un contexto de desigualdad estructural, fragilidad política y violencia generalizada, las consecuencias trascienden más allá de las fronteras nacionales con implicaciones graves para las mujeres en tránsito por la región.
- * La escasa atención que han recibido estos recortes —en particular los relacionados con los servicios de VBG— a pesar de la gravedad de la crisis, es otro factor clave. Los medios de comunicación, el gobierno y los actores internacionales han mostrado poca preocupación de manera pública. Hasta ahora, la única institución nacional que ha dado la voz de alarma ha



sido el CONADEH. A nivel internacional Honduras sigue ausente de las agendas humanitarias y de VBG —incluso dentro de las prioridades en el pasado para EE. UU.— en comparación con crisis más visibles. Como señala el NRC, y como también ha constatado la WRC en los espacios internacionales en los que participa, Honduras se encuentra entre las crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo, debido a su escasa visibilidad mediática y a la falta persistente de voluntad política para abordar estos problemas, especialmente sus dimensiones de género (NRC, 2024, 2025). Esta invisibilidad persiste.

El panorama para 2025 y los años siguientes es cada vez más preocupante. EE. UU. fue, durante mucho tiempo, el mayor y más constante donante de Honduras. Como demuestra este informe, ese apoyo fue esencial para mantener los servicios básicos para las mujeres sobrevivientes y aquellas en riesgo de sufrir VBG —particularmente en las zonas fronterizas, en los CAMR y las comunidades con altos niveles de violencia. Su retirada abrupta desmanteló estructuras clave de protección, dejando a las mujeres sin opciones reales y a los equipos de primera línea sin los recursos necesarios.

Dada la magnitud de las contribuciones pasadas de EE. UU., es poco probable que otro donante llene ese vacío, no solo porque Honduras no es actualmente una prioridad mundial, sino porque pocos tienen la capacidad de igualar este nivel de ayuda. En 2023, el segundo mayor donante fue Japón, que aportó 31,9 millones de USD, seguido de Alemania, con 26,5 millones de USD, montos significativamente menores a los 188 millones de USD aportados por EE. UU. (Migration Policy Institute, 2025; OCDE, 2025). Está marcada disparidad pone en evidencia la magnitud del déficit; uno que pocos, si es que hay alguno, están en condiciones de cubrir. Además, la mayor parte de la ayuda internacional restante ya está asignada a otros sectores o zonas geográficas donde la VBG no es una prioridad (*Ibid.*). Al momento de redactar este informe, varias personas entrevistadas confirmaron que no hay indicios claros de que los donantes tengan previsto redirigir fondos para abordar estas crecientes brechas de protección.

A nivel nacional, la respuesta del gobierno frente a las consecuencias de estos recortes también ha sido limitada. Si bien las autoridades se han centrado principalmente en la acogida de las personas deportadas —tratándolo mayormente como una cuestión humanitaria— este enfoque estrecho ha dejado sin atender otras necesidades críticas. La respuesta nacional ante la VBG es un claro ejemplo. Si bien hay instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) y las CAMR que se han esforzado por mitigar las consecuencias de la retirada de la cooperación estadounidense, aún no existe una estrategia nacional coordinada para evaluar los impactos o cerrar las brechas crecientes de protección que afectan a mujeres y las niñas. Más preocupante aún, en lugar de proponer soluciones concretas, el Congreso Nacional de Honduras anunció recientemente que investigará a las organizaciones de la sociedad civil que recibieron fondos de USAID, acusándolas de promover agendas ocultas «contrarias a los intereses nacionales» (SWI, 2025). Una organización internacional describió la medida como «una especie de cacería de brujas», y añadió:

«En lugar de evaluar el impacto y buscar soluciones, el gobierno nos está echando la culpa a nosotros. Es una forma de desviar la atención de su propia inacción.»

Sin embargo, la responsabilidad de la crisis actual no recae únicamente en el Estado hondureño. Los cambios de políticas estadounidenses —especialmente bajo la nueva administración— han acelerado el desmantelamiento de servicios clave de protección. Entre ellas se incluyen el retiro abrupto de fondos, la expansión de la detención de inmigrantes, la deshumanización de las poblaciones migrantes en los discursos y acciones y severas restricciones a los programas con enfoque de género. La prohibición a los pocos socios financiados por EE. UU. de trabajar en temas de VBG, sumada al acceso cada vez más restringido al asilo y a los abusos durante los procesos de detención y deportación, han debilitado los marcos de protección más allá de las

fronteras de Honduras. Esta situación revela una falla más amplia de los sistemas nacionales e internacionales para garantizar la continuidad de la atención a las poblaciones en riesgo. También pone de relieve los riesgos de depender excesivamente de un solo donante, no solo en términos de financiación, sino en cuanto a la inexistencia de planes de contingencia cuando cambian las prioridades geopolíticas. En este caso, el retiro abrupto y casi total de fondos previamente aprobados, incluso para programas ya en marcha, hizo que la transición fuera prácticamente imposible, lo que dejó sin respuesta brechas críticas de protección.

Al mismo tiempo, la situación actual subraya una verdad fundamental: la migración — especialmente cuando está motivada por la violencia, la pobreza y la desigualdad— no parará completamente a menos que se aborden sus causas estructurales. Hasta que las mujeres y niñas puedan vivir sin miedo, con acceso a justicia, los medios de subsistencia y a los servicios esenciales, muchas seguirán migrando para sobrevivir. Aunque esta no es una carga que deba recaer únicamente sobre Honduras, es imprescindible que el país asuma un rol de liderazgo en su abordaje.

Las estrategias eficaces de migración y protección deben basarse en la cooperación regional, la responsabilidad compartida y una inversión sostenida en resiliencia de las comunidades. En última instancia, el desmantelamiento de los servicios de protección para mujeres y niñas en Honduras no es solo una cuestión de presupuestos o agendas políticas cambiantes; lo que está en juego son sus vidas, puestas en riesgo por la inacción y la negligencia institucional. Reconstruir este sistema de protección requerirá una voluntad política decidida, una financiación diversificada y estable, y una inversión renovada con enfoque feminista y centrada en las comunidades. Lo que está en juego no es solo la continuidad de los servicios, sino la vida, la dignidad y el futuro de la población con mayores riesgos y vulnerabilidades.

Principales Conclusiones

Este informe presenta seis conclusiones clave que reflejan la gravedad de la situación actual.

Hallazgo nº 1

Para muchas mujeres hondureñas, la migración no es una elección, sino una estrategia de supervivencia.

La VBG es un factor importante, aunque poco reconocido, en la migración de las mujeres en Honduras. Los datos oficiales y las encuestas suelen enmarcar la migración en términos económicos, sin captar las amenazas específicas por razones de género como la violencia sexual, el feminicidio y la impunidad sistémica. Como resultado, las experiencias de las mujeres se agrupan en categorías genéricas que invisibilizan los riesgos reales que enfrentan, lo que conduce a diagnósticos erróneos y, en consecuencia, a respuestas inadecuadas. Muchas huyen de estructuras criminales y de la negligencia del Estado. Para las mujeres deportadas y retornadas, la protección sigue siendo inaccesible, dejándolas vulnerables a la misma violencia que las obligó a huir. Como señaló una participante:

«La mujer no puede volver a casa, ni puede quedarse. Todas las puertas están cerradas.»

Para miles de mujeres hondureñas, la migración no es un acto voluntario, es lo que se ha denominado una «elección sin opciones, tomada en ausencia de seguridad, justicia y alternativas viables».

Hallazgo nº 2

Incluso antes de los recortes de fondos estadounidenses, la respuesta a la VBG ya era estructuralmente frágil.

A pesar del aumento de la atención a la VBG entre 2022 y 2024, el sistema de respuesta en Honduras ya presentaba debilidades estructurales. Los avances en la adopción de políticas y en la coordinación —especialmente en contextos de migración— no se acompañaron de financiamiento sostenible ni de apropiación institucional. La mayoría de los servicios seguían dependiendo de la cooperación internacional, eran a corto plazo y altamente localizados, lo que limitaba la atención y su sostenibilidad. Incluso políticas ampliamente esperadas, como el Protocolo de Atención a la Violencia Sexual, permanecen en gran medida sin aplicar por falta de regulación y de recursos. Mientras que los programas financiados por EE. UU. destacaban por su alcance plurianual y su coordinación, todavía había profundas fallas para poder llegar a las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes. Las redes de derivación eran esenciales, particularmente en las zonas donde las organizaciones comunitarias de mujeres llenaban los vacíos institucionales. A medida que los actores clave empezaron a retirarse en el 2025, las personas entrevistadas advirtieron que el sistema ya mostraba signos de agotamiento y que cualquier recorte adicional podría llevarlo al colapso.

Hallazgo nº 3

Disponibilidad en retroceso: escasa acción estatal frente al aumento de brechas en los servicios de VBG.

La disponibilidad de los servicios contra VBG en Honduras se ha reducido drásticamente, con más de 21 organizaciones e instituciones que redujeron o suspendieron su apoyo en 2025. Servicios esenciales — como asistencia legal, apoyo psicosocial y atención de emergencia— ahora son limitados o inexistentes en zonas de alto riesgo. Pese al aumento de las necesidades humanitarias, hay poca acción estatal para llenar ese vacío. Esta falla es especialmente evidente en el colapso del sistema de casas refugios para sobrevivientes. Tras los recortes de la ayuda estadounidense, las casas refugios perdieron financiación, personal y capacidad operativa. En San Pedro Sula, un refugio clave que se preparaba para atender a las mujeres desplazadas se vio obligado a cerrar en abril de 2025. Aunque existe la Ley de Casas Refugio, sigue sin estar reglamentada, y los fondos estatales se han desviado a instalaciones que aún no se construyen. Las redes de derivación que antes permitían atender a las sobrevivientes se han desarticulado, y estas han quedado atrapadas en unos sistemas fragmentados sin rutas claras para la protección. La crisis actual pone al descubierto no solo la falta de financiación, sino la falta estructural de voluntad política para priorizar la vida de las mujeres.

Hallazgo nº 4

Acceso restringido, menor demanda: las sobrevivientes enfrentan barreras cada vez mayores para acceder a la protección.

Las mujeres y niñas migrantes, deportadas y desplazadas se enfrentan en Honduras a barreras cada vez mayores para acceder a los servicios de atención a la VBG. Entre el 60 % y el 100 % de los servicios especializados de organizaciones e instituciones clave han sido desmantelados — especialmente en las rutas migratorias y en los CAMR— tras los recortes de fondos de EE. UU. Los programas comunitarios que antes eran puntos de entrada para atender los casos de VBG han desaparecido en gran medida. El resultado no es una disminución de este tipo de violencia, sino de su visibilidad. El uso de servicios ha caído, no porque la violencia haya disminuido, sino porque han desaparecido los espacios y mecanismos que facilitaban el acceso a ayuda.



Este deterioro es evidente en la experiencia de las mujeres deportadas. Muchas regresan tras haber sufrido abusos institucionales en los centros de detención estadounidenses, incluyendo el retiro forzoso de su ropa interior, la denegación de productos sanitarios y casos de violencia sexual. Estos abusos se han hecho más frecuentes desde que se debilitaron los mecanismos de supervisión, como advirtió la WRC. Al retornar, muchas mujeres siguen enfrentándose a graves riesgos. Aunque el personal de los CAMR mantiene su compromiso, el sistema ha perdido entre el 30 % y el 40 % de los socios especializados que antes apoyaban la respuesta a la VBG. Las evaluaciones se realizan apresuradamente y el temor a represalias o al estigma suele impedir que las mujeres denuncien los abusos. Como resultado, quienes enfrentan mayores riesgos son a menudo las menos identificadas y asistidas.

Hallazgo nº 5

Aumenta el riesgo de explotación para las mujeres migrantes.

A medida que los actores humanitarios se retiran de las zonas fronterizas, los grupos criminales ocupan rápidamente su lugar, y trafican cada vez más con mujeres migrantes, obligándolas a prostituirse para financiar su retorno. El creciente patrón de migración inversa —mujeres que regresan al sur tras intentos fallidos de entrar a EE. UU.— ha pasado en gran medida desapercibido por la falta de datos oficiales, recursos y mecanismos de protección. Los programas para asistir a las mujeres que están regresando o a las que sufren VBG durante el tránsito han sido gravemente debilitados. El riesgo de explotación va en aumento y las organizaciones advierten de que, en ausencia de una presencia humanitaria, las mujeres quedan completamente desprotegidas. Como señaló una organización de la sociedad civil: «Las mujeres quedan a merced de Dios.» A menos que se tomen medidas urgentes para restablecer la protección y la coordinación humanitaria en puntos estratégicos, esta crisis emergente seguirá extendiéndose de forma invisible e incontrolada.

Hallazgo nº 6

La calidad de los servicios de VBG se ha deteriorado gravemente.

El drástico deterioro de la calidad de los servicios para mujeres sobrevivientes se ha convertido en una de las consecuencias más alarmantes de los recortes recientes. Organizaciones que antes brindaban asistencia especializada, con personal formado y sistemas de derivación relativamente sólidos, ahora funcionan con recursos mínimos o se han visto obligadas a cerrar. Como dijo un actor internacional: «El nivel de especialización que teníamos antes [...] ha desaparecido.» Muchos casos de mujeres sobrevivientes se gestionan actualmente a través de sistemas generales de evaluación de riesgos, sin contar con personal capacitado para identificar o responder a sus riesgos específicos, lo que compromete su seguridad desde el primer momento.

Los programas de empoderamiento económico, esenciales para la recuperación a largo plazo, también han desaparecido, lo que deja a las sobrevivientes atrapadas en ciclos de dependencia económica y exposición reiterada a la violencia. En un país en el que la mayoría de las mujeres vive con menos de 5,50 USD al día, romper el ciclo de la violencia sin apoyo económico suele ser inviable. Mientras los proveedores de servicios luchan por mantenerse a flote, la recaudación de fondos ha desplazado a la atención directa. El personal de organizaciones nacionales ha sido retirado del trabajo en primera línea para organizar rifas y bingos para poder sostener sus servicios. El resultado es un sistema fragmentado y falto de recursos, que ya no puede garantizar los estándares básicos a las mujeres y niñas sobrevivientes y en situación de riesgo.

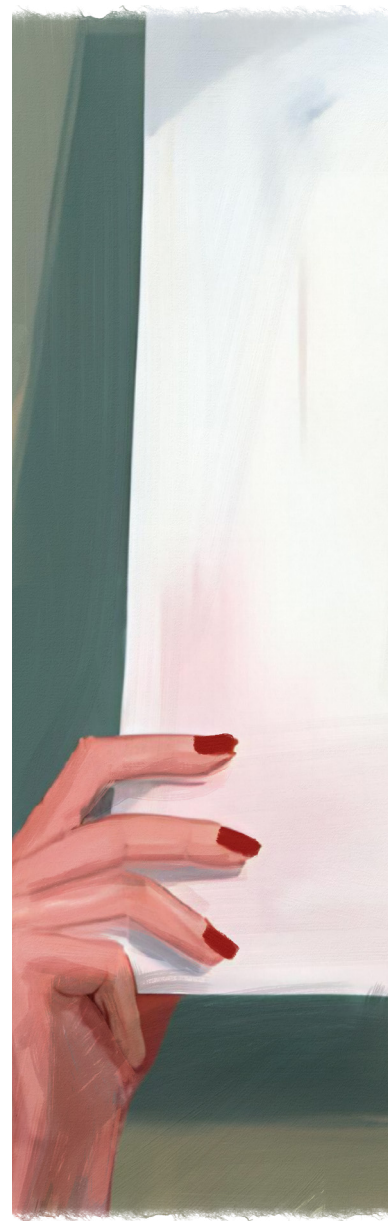
Recomendaciones

Al Gobierno de EE. UU.

- * Garantizar que las personas que huyen de persecución, particularmente las que lo hacen por motivos de género, tengan una oportunidad plena y justa de solicitar asilo, tal y como exigen las leyes estadounidenses y las obligaciones internacionales.
- * Mantener los estándares mínimos de atención y seguridad en la aplicación de las leyes migratorias y en los centros de detención, incluyendo el acceso oportuno a atención médica y psicológica. Esto incluye restablecer la Declaración de Política y Acciones Requeridas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) con respecto a personas embarazadas, en posparto, lactantes y bebés bajo custodia, y garantizar que todas las instalaciones de CBP cumplan con dicha directiva. Asimismo, asegurar el cumplimiento de la Directiva 11032.4 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre la identificación y monitoreo de personas embarazadas, en posparto y lactantes.
- * Reinvertir en programas de prevención y respuesta a la VBG previamente financiados por el Departamento de Estado y USAID —en especial aquellos que brindan atención psicosocial y servicios de empoderamiento económico que no pueden sostenerse sin la financiación de EE. UU. Esto incluye cumplir con los compromisos asumidos en la Estrategia de EE. UU. para Prevenir y Responder a la Violencia Basada en Género a Nivel Global de 2022.
- * Contribuir a abordar las causas estructurales de la migración, incluida, entre otras, la VBG, conforme al Pilar V de la Estrategia de EE. UU. para Abordar las Causas Fundamentales de la Migración en Centroamérica. Las estrategias deben incluir mayor disponibilidad de servicios de apoyo a sobrevivientes, inversión en programas con enfoque de género y aumento del acceso a la justicia.
- * Prorrogar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y considerar el deterioro persistente de las condiciones de vida que justificaron su designación inicial.

Al Congreso de EE. UU.

- * Restablecer los mecanismos de supervisión de la aplicación de las leyes migratorias, incluyendo la financiación completa de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (CRCL), la Oficina del Defensor de las Personas en Detención Migratoria (OIDO), y la Defensoría de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
- * Restablecer y proteger el financiamiento de la ayuda humanitaria y servicios para la respuesta a la VBG en Honduras y la región.
- * Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas en los acuerdos migratorios bilaterales y regionales y asegurar que se aborden los riesgos relacionados con la VBG y que se eviten deportaciones a contextos de alto riesgo.



A las organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil en Honduras

- * Documentar y cuantificar los efectos de los recortes de la ayuda internacional sobre la vida y seguridad de las mujeres y su acceso a los servicios de atención de la VBG, y generar evidencia para la incidencia y la exigencia de responsabilidades.
- * Continuar con la incidencia colectiva para exigir la regulación e implementación de marcos normativos clave, como la Ley de Casas Refugio y el Protocolo de Atención a la Violencia Sexual.

Al Gobierno de Honduras

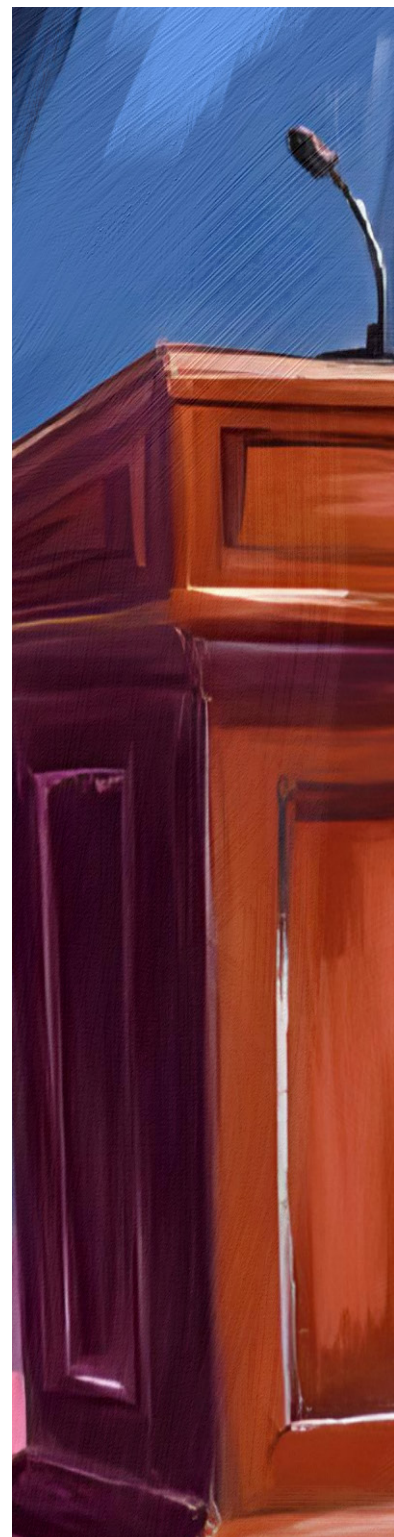
- * Evaluar e informar públicamente sobre el impacto de las reducciones de la ayuda estadounidense en el sector de VBG, incluyendo las brechas en la atención, el aumento de riesgos y las vulnerabilidades crecientes para mujeres y niñas.
- * Coordinar esfuerzos nacionales para responder a las brechas de protección que afectan a sobrevivientes de VBG y a mujeres en riesgo, en especial en los CAMR, CAMI y comunidades de alto riesgo.
- * Garantizar que la Secretaría de la Mujer lidere la recuperación de los servicios de protección y casas refugio, incluyendo la reglamentación y puesta en marcha de la Ley de Casas Refugio, el desembolso de fondos de emergencia para los refugios existentes y la supervisión de la aplicación del Protocolo de Atención a la Violencia Sexual
- * Reforzar los mecanismos de asistencia y protección para las mujeres y niñas que retornan en la migración inversa, asegurando procesos de identificación, acompañamiento y derivación adecuados.
- * Investigar, dismantelar y sancionar las redes criminales involucradas en trata y violencia organizada, especialmente en zonas de alto riesgo para mujeres migrantes con acciones coordinadas con el Ministerio Público y la Policía Nacional de Honduras
- * Reforzar la capacidad de los CAMR, reactivando los equipos de respuesta a la VBG y garantizando evaluaciones, derivaciones y apoyo psicosocial efectivos.

Al Congreso de Honduras

- * Aprobar asignaciones presupuestarias específicas para ampliar el sistema nacional de prevención y respuesta a la VBG, incluida la financiación a casas refugio, la atención psicosocial y la protección comunitaria, en consonancia con la Ley de Casas Refugio y el Protocolo de Atención a la Violencia Sexual.
- * Ejercer su rol de supervisión y monitorear el cumplimiento de las leyes y presupuestos vinculados a la VBG y garantizar que las instituciones rindan cuentas por el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

A los gobiernos municipales

- * Revisar y actualizar las rutas municipales de derivación de casos de VBG para que reflejen los riesgos actuales, tomando en cuenta las limitaciones presupuestarias y los recursos disponibles.
- * Promover una responsabilidad compartida entre niveles de gobierno frente a la VBG, evitando que los gobiernos locales enfrenten esta carga en solitario.



A los donantes internacionales

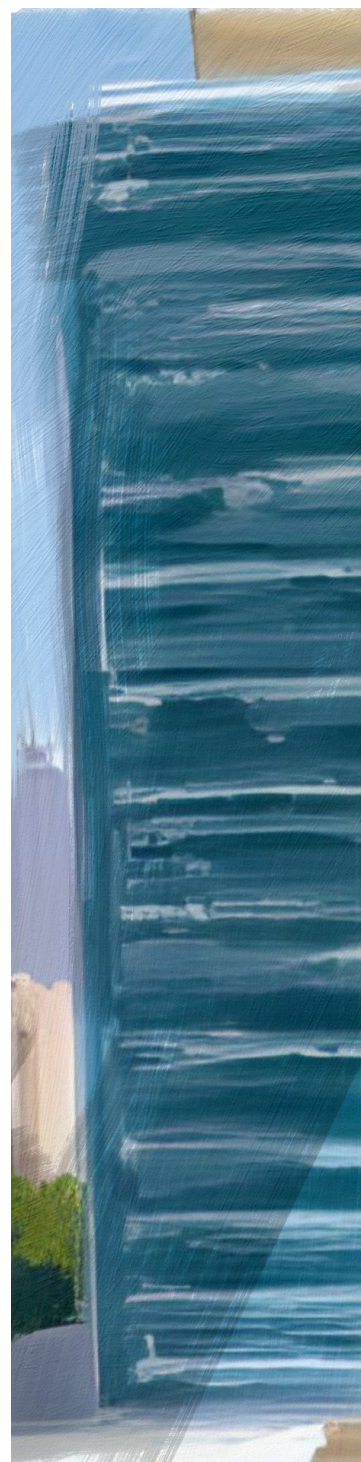
- * Restablecer y priorizar la prevención y la respuesta a la VBG en la agenda de financiación humanitaria para Honduras. La financiación debe concentrarse en las organizaciones nacionales y locales de mujeres con experiencia demostrada y profundos vínculos con la comunidad.
- * Proporcionar financiamiento plurianual, flexible y liderado localmente para financiar tanto la respuesta de emergencia como la recuperación a largo plazo de las mujeres sobrevivientes, desplazadas, deportadas y en situación de riesgo.
- * Financiar programas de protección integrales que combinen la asistencia psicosocial, la empoderamiento económico y asistencia legal sobre todo en regiones con altos índices de violencia y desplazamiento.
- * Invertir en recolección de datos, investigación y monitoreo para evaluar las brechas de protección y el impacto de los recortes de ayuda internacional sobre la capacidad de respuesta a la VBG.

A las agencias de las Naciones Unidas y a la arquitectura humanitaria

- * Reconocer la gravedad de la crisis de VBG que atraviesa Honduras e incorporar esta prioridad en los planes de respuesta interagencial, estrategias de financiamiento y acciones de incidencia pública.
- * Integrar de manera sistemática la VBG en todos los componentes de la respuesta humanitaria y en los mecanismos de coordinación en Honduras, garantizando que no continúe siendo relegada frente a otras prioridades operativas y políticas.
- * Promover mayor visibilidad internacional y financiación para responder a la VBG, utilizando plataformas globales para contrarrestar la invisibilidad de la crisis en Honduras.
- * Fortalecer la evaluación conjunta y la coordinación entre agencias de Naciones Unidas, coordinando iniciativas con instituciones nacionales y organizaciones comunitarias para brindar una respuesta efectiva.
- * Continuar apoyando al Gobierno en el fortalecimiento de estándares de protección frente a la VBG —incluido el acceso a refugio, salud y justicia— mediante asistencia técnica, capacitación e inversión en rutas de derivación. ACNUR y OIM deben reforzar y ampliar los esfuerzos actuales.
- * Ir más allá de campañas de sensibilización y capacitaciones y abordar los riesgos que amenazan la vida de las mujeres y niñas en contextos de VBG y trata. La UNODC debe apoyar a las instituciones de justicia en el desmantelamiento de redes criminales y trabajar con actores humanitarios para garantizar protección efectiva.

A los gobiernos y socios regionales

- * Reforzar/establecer los mecanismos de coordinación transfronterizos para la protección de las mujeres víctimas de la trata, explotadas o expuestas a la violencia durante la migración.
- * Incorporar la mitigación de riesgos de VBG y servicios para sobrevivientes en los protocolos de migración y retorno, asegurando el acceso a canales seguros de denuncia, refugios temporales y atención médica en las fronteras y puntos clave de tránsito, independientemente del estatus migratorio de las mujeres.





Acrónimos y abreviaturas

CARM	Centro de Atención al Migrante Retornados
CBP	Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos
CRCL	Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles
VBG	Violencia basada en género
ICE	Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos
ONG	Organización no gubernamental
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
MSF	Médicos sin Fronteras
OIDO	Oficina del Defensor del Inmigrante Detenido
PEP	Profilaxis postexposición
CAMI	Centro de Atención al Migrante Irregular
TPS	Estatus de protección temporal
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USCIS	Defensoría de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos
WRC	Comisión de Mujeres Refugiadas

Notas Finales

- 1 Esta cifra se refiere a los fondos de cooperación estadounidenses asignados a Honduras en 2024. Se esperaba una cantidad similar para 2025.
- 2 Como reconoce la propia encuesta, los resultados se basan en las respuestas de sólo 10 organizaciones y deben interpretarse con cautela (OCHA, 2025).
- 3 Esta estimación se basa en los datos facilitados por 25 instituciones entrevistadas, organizaciones locales e internacionales.
- 4 Una de estas organizaciones es HIAS. Las otras dos aún no han anunciado públicamente su retirada.
- 5 En este texto, “retorno” engloba la deportación, el llamado retorno voluntario y la migración inversa. Cuando se haga referencia específica a uno de ellos, se indicará explícitamente.
- 6 Dada la naturaleza sensible del tema y la evolución del contexto de la investigación, los nombres y las afiliaciones institucionales de las personas entrevistadas se han reservado para garantizar su confidencialidad y seguridad.
- 7 Estas cifras incluyen deportaciones principalmente de México, Guatemala y Estados Unidos. Las deportaciones sólo desde EE.UU. también disminuyeron, de 12.038 en 2024 a 10.534 en 2025, lo que supone un descenso de aproximadamente el 12,5% en el mismo periodo.
- 8 La expresión «elección sin opciones», acuñada por el académico Lawrence L. Langer en el contexto del Holocausto, describe situaciones en las que los individuos se ven obligados a actuar bajo una coerción extrema. En este reporte, se utiliza para reflejar las realidades profundamente limitadas que enfrentan muchas mujeres que huyen de la violencia sistémica en Honduras.
- 9 En este informe, “retorno” se refiere en sentido amplio al proceso por el que las personas regresan a su país de origen, ya sea mediante deportación, retorno forzoso o el llamado retorno “voluntario”.
- 10 Durante este periodo se aprobaron varias políticas importantes: la Ley de Protección de la Mujer en Contextos de Emergencia, la legalización de la anticoncepción de emergencia en caso de violación, la Ley de Desplazamientos Forzados y la Ley de Refugios.
- 11 Kit de profilaxis posexposición.
- 12 Se seleccionó Danlí debido a su papel central en respuestas migratorias previas y a la diversidad de casos que atiende. Si bien esta ruta de derivación es probablemente una de las más completas del país, la mayoría de los municipios no cuenta con acceso a servicios similares. Además, por razones de espacio, solo se presentan los componentes de salud y apoyo psicosocial, con el fin de ilustrar cómo operan los sistemas de referencia en la práctica.

Referencias

ACNUR (2023). Estadísticas sobre refugiados. <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/insights/annexes/trends-annexes.html?situation=2>

Banco Mundial (2024). *En busca de un mejor futuro: Estudio de la migración desde los países del Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.*

CDM (2018). *Violencias contra las mujeres: la denuncia y sus rutas de atención.*

CDM (2024). *Violencia sexual contra mujeres y niñas en Honduras, 2022-2023.*

CIPPDV (2019). *Estudio de caracterización del desplazamiento interno por violencia en Honduras 2004-2018.*

Cleaveland, C. y M. W. y Waslin, M. (2025). *Women Seeking Asylum in the Age of Trump.*
Confidencial HN. (2025). *Unos 250 millones de dólares recibió Honduras por ayudas internacionales en 2024.*

Contracorriente. (2020). *Femicidios en Honduras: Las mujeres que el Estado no escuchó.*
<https://contracorriente.red/2020/08/08/femicidios-en-honduras-las-mujeres-que-el-estado-no-escucho/>

Contracorriente (2024, 8 de julio). *Médicos Sin Fronteras pide implementación de protocolo de atención en casos de violencia sexual.* <https://contracorriente.red/2024/07/08/medicos-sin-fronteras-pide-implementacion-de-protocolo-de-atencion-en-casos-de-violencia-sexual/>

Departamento de Estado de EE. UU. (marzo de 2023). *Relaciones de EE. UU. con Honduras: Hoja Informativa de Relaciones Bilaterales.* <https://2021-2025.state.gov/relaciones-de-ee-uu-con-honduras/>

Flórez, D. (2021). *¿Es el desplazamiento forzado otro ejemplo de la feminización de la violencia en Honduras? Investigación sobre violencia sexual y femicidios como causas del desplazamiento forzado.*

HIAS y ACNUR. (2023). *Our Right to Safety: Placing Forcibly Displaced Women at the Centre of Protection in Latin America.*

HRW (2025). *Informe Mundial 2025: Honduras.*

ICG (2023). *New Dawn or Old Habits? Resolving Honduras' Security Dilemmas.* Report no. 100.

INE (2022). *Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia Contra las Mujeres y Niñas de 15 Años y Más (ENESVMN).*

INE y OIM. (2023). *Encuesta Nacional de Migración y Remesas en Honduras 2023: Informe Final.*
INM (2025). *Migración Irregular/Retornados Estadísticos.* <https://inm.gob.hn/migracion-irregular.html>

Insight Crime (febrero de 2024). *Balance de InSight Crime de los homicidios en 2024.* <https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2024/#h-honduras-26-5>

Internal Displacement Monitoring Centre (2025). Honduras. NRC. <https://www.internal-displacement.org/countries/honduras/>

Luciano, D., Hidalgo, N., Acuña, N. y Urban, A. (2020). *Femicidio en Honduras. Nota Técnica n° BID-TN-1551*.

Masood, T. (2025). *USAID - Country, Region(s) and Office wise Resumed Awards*. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/tailalmasood_usaid-country-regions-and-office-wise-activity-7311876608716369920-1005

Mejía, A. (2023). *Las casas invisibles de Honduras. Reportar sin miedo*. <https://reportarsinmiedo.org/2023/01/02/las-casas-invisibles-de-honduras/>

Migration Policy Institute (2025). *Situational Awareness Report. Latin America and the Caribbean*.

NRC (2024). *The World's Most Neglected Displacement Crises in 2023*. <https://www.nrc.no/feature/2024/the-worlds-most-neglected-displacement-crises-2023/>

NRC (2025). *The World's Most Neglected Displacement Crises in 2024*. <https://www.nrc.no/feature/2025/the-worlds-most-neglected-displacement-crises-in-2024>

OCHA (2024). *Monitoring the Humanitarian Response: Honduras, Bulletin No. 1, January–June 2024*.

OCHA (2025). *US Funding Freeze Global Survey, Round 2: Preliminary Analysis*. <https://humanitarianaction.info/document/us-funding-freeze-global-survey/article/us-funding-freeze-global-survey-round-2-preliminary-analysis-survey/article/us-funding-freeze-mundial-survey-round-2-preliminary-analysis>.

OCDE (2025). *Official Development Assistance at a Glance, Honduras*. <https://www.oecd.org/en/data/dashboards/official-development-assistance-at-a-glance.html>

OIM (2024). *Estrategia de la OIM para Honduras 2024-2026*. https://crisisresponse.iom.int/sites/g/files/tmzbd11481/files/appeal/documents/oim_estrategia-final-rev-hn-2024-2026_0.pdf

OIM (2025). *Flash report: Migración de Tránsito y Retorno - Honduras, Enero a Febrero 2025*. <https://nortedecentroamerica.iom.int/sites/g/files/tmzbd11276/files/documents/2025-03/flash-report-oim-migracion-de-transito-y-retorno-marzo-2025-vf.pdf>

Oxfam (2018). *El riesgo de ser mujer en Honduras*.

Pew Research Center (2024). *What We Know About Unauthorized Immigrants Living in the U.S*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/07/22/what-we-know-about-unauthorized-immigrants-living-in-the-us/>

Proceso Digital (30 de abril de 2024). *En aumento el desplazamiento forzado de mujeres en Honduras*. <https://proceso.hn/en-aumento-el-desplazamiento-forzado-de-mujeres-en-honduras/>

República de Honduras (2022). *Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República*.



República de Honduras (2023). *Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República*.

República de Honduras (2024). *Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República*.

SIAMIR (2025). *Tablero Estadístico Dinámico de Atención a Personas Migrantes Retornadas*.
<https://bit.ly/3ZForY2>

Subclúster de VBG (2025). *Monitoreo de la respuesta: enero a diciembre 2024*.

Transparencia Internacional. (2023). *Índice de percepción de la corrupción 2023*.

UNAH (2024). *Resultado de Análisis Femicidio 2014-2023*.

UNAH (2025). *Infografías, Migración y TPS*.

UNODC y ONU Mujeres. (2024). *Femicides in 2023: Global Estimates of Intimate Partner/Family Member Femicides*. Viena: UNODC, 2024.

US Customs and Border Protection (2025). *Nationwide Encounters*. CBP Newsroom Stats and Summaries. <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters>

WOLA (2023). *A medio camino hacia EE. UU.: un informe desde Honduras sobre migración*.

World Bank (2023). *Gender-Based Violence Country Profile: Honduras*.

World Bank (2024). *Honduras Poverty and Equity Brief: October 2024*.

WRC (2025). *Oversight Is Critical for Women and Girls in Immigration Detention*.

WRC y Refugees International (2025). *Limited Aid and Impossible Choices for People Seeking Refuge: The Human Impact of Trump Administration Policies in Costa Rica*.

